

confianza» y, lo más importante, «no ligado» a los partidos políticos.

El general Schneider obligó a Frei a cumplir con parte del petitorio original de Viaux: en enero de 1970, los sueldos de los generales fueron elevados desde un equivalente de 6 sueldos vitales a 12 sueldos vitales. Es decir, los generales pasaron a integrar el grupo superior del 2 % de los hogares chilenos que tienen mayores ingresos. Antes, estaban en el grupo del 10 % superior de los hogares con mayores entradas. (Sueldo vital es la cantidad mínima de remuneración fijada por ley, cada año, para los empleados del Estado y de las empresas privadas). Del mismo modo, el presupuesto de gastos en material de guerra fue elevado en un 50 % para el año fiscal siguiente, y se comenzaron a estudiar planes de ampliación del número de oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. (Esos planes de ampliación del número de oficiales sólo se hicieron efectivos a partir de 1971, bajo la administración de Salvador Allende.)

Por otra parte, se acordó que el propio cuerpo de generales del Ejército estudiaría «un plan de acción» a largo y corto plazo, para poner en práctica la demanda del general Viaux de «dar una verdadera responsabilidad a las Fuerzas Armadas como la solución de los grandes problemas nacionales». Ese plan, en el año 1970, sería diferido por los propios generales, para ocuparse de la forma de intervenir «en busca de la paz social», en caso de que la lucha electoral por la contienda presidencial desembocara en enfrentamientos violentos entre distintas facciones políticas: situación que fue amenazante durante todo el año 1970 antes del 4 de septiembre, día de los comicios presidenciales de Chile.

### *Allende, presidente*

En abril de 1970, la campaña presidencial estaba causando algunas sorpresas para los «expertos», que habían dado por «cadáver político» a Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular (el senador socialista había sido derrotado tres veces en las campañas presidenciales de 1952, 1958 y 1964). Las encuestas de opinión pública demostraban que en los extremos norte y sur del país, en la concentración industrial de Concepción y en Santiago, las simpatías por Allende, sobre todo entre los obreros, campesinos y empleados, le aseguraban un por-

centaje de votación superior al 35 %. Como la elección presidencial se daba con tres candidatos (los otros eran el ex presidente de la República Jorge Alessandri, y el senador demócratacristiano Radomiro Tomic) había «grandes posibilidades» de que Allende ganara estrechamente la votación del día 4 de septiembre del mismo año.

En la última semana de abril de 1970, hubo una reunión importante en la casa de Patricio Rojas, ministro del Interior del Presidente Eduardo Frei, a la que asistieron el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar; el senador demócratacristiano Patricio Aylwin; el senador nacional (conservador) Pedro Ibáñez, y el director de la empresa Manufacturera de Papeles y Cartones, Arturo Matte Larraín. El tema de la conversación fue único: cómo evitar que Salvador Allende fuera Presidente de la República si ganaba las elecciones en septiembre.

La Constitución chilena vigente hasta el asalto fascista militar a la democracia burguesa, establecía que si el candidato triunfante en las elecciones presidenciales «no obtiene la mitad más uno de la votación», entonces, cincuenta días después, el Parlamento «podrá proclamar Presidente a cualquiera de los dos candidatos que hayan obtenido las dos primeras mayorías». Es decir, el Parlamento podía elegir «al segundo». De esto se colgaron los contertulios de aquella reunión para comenzar una campaña de opinión pública con el propósito de hacer «elegir al segundo de Allende», fuera éste Tomic o Alessandri. A fin de dar un barniz de «legitimidad estatal» a esta maniobra, los contertulios acordaron pedirle al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider Chereau, que declara públicamente que las Fuerzas Armadas «garantizarían» la elección del segundo candidato presidencial, en caso de que fuera necesario.

Patricio Rojas habló con Schneider, y a través de Andrés Zaldívar, se obtuvo que Agustín Edwards ordenara al director de su periódico, «El Mercurio», que hiciera entrevistar al general comandante en jefe del Ejército. El día 8 de mayo de 1970, en primera página, apareció la entrevista al general Schneider, el cual, en síntesis, estableció los siguientes puntos:

«El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional».

«El Ejército es garante de elección normal, de que asuma la Presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo o por el Congreso Pleno». (Esta era la esencia de la cuestión: Schneider decía que los militares garantizarían la asunción como Presidente de quien sacara el 51 % o más de los votos en

septiembre —imposible para Allende—, o del segundo candidato, si el primero —Allende— sacaba menos del 51 %. Así cumpliría con el encargo de la colusión demócratacristiana-conservadora. Pero Schneider fue más allá, y habló de «garantizar» sólo una «elección normal». Esto abría la posibilidad de que los militares encontraran «anormal» una elección en que Allende sacara más del 51 % de los votos, y la anularan, para llamar a nuevas elecciones.)

«La intervención en política está fuera de todas nuestras doctrinas. Somos garantes de un proceso legal en el que se funda toda la vida constitucional del país».

«Si se producen hechos anormales (convulsión interna), nuestra obligación es evitar que ellos impidan que se cumpla lo que indica la Constitución». (En estos dos puntos, Schneider aclara que los militares no se abanderizarán con los partidos políticos, pero actuarán si se pone en peligro el sistema de dominio del imperialismo norteamericano y la oligarquía nacional de la sociedad chilena —«la vida constitucional del país»—. Es el mismo argumento utilizado por los generales fascistas el 11 de septiembre de 1973 para destruir a sangre y fuego la democracia burguesa chilena, cuando se mostró inadecuada para defender los intereses de los dueños de Chile.)

«Quien tenga una inquietud grande con respecto a ciertas ideas, ciertas tendencias o ciertas actividades políticas y desee participar en ellas, lo mejor es que deje el uniforme y las abrace como un civil». (Schneider hacía una severa advertencia a un débil porcentaje de mandos medios del Ejército, que mostraba ciertas simpatías con la candidatura de Allende. En realidad, lo que Schneider ponía en práctica era una llamada de atención hacia una amenaza de «rebrote» de ideas progresistas en los mandos militares, después que durante los años 1961 y 1962 se había completado la tarea de limpieza interna, llamando a retiro a todos los oficiales sospechosos de simpatizar con «ideas socialistas».)

Sin embargo, llegó el 4 de septiembre de 1970, y la situación política se presentó de manera distinta a como la habían planificado los dirigentes reaccionarios de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y las comandancias en jefe de las Fuerzas Armadas. Aun cuando los resultados fueron los previstos (Allende con 1.075.000 votos, el 36,3 %; Alessandri con 1.036.000 votos el 34,9 %; y Tomic con 824.000 votos, el 27,8%); la «presión política» era muy distinta a lo pensado. El triunfo relativo de

Allende, en la noche del 4 de septiembre, fue recibido por su millón de simpatizantes con una explosión de entusiasmo, se hicieron fiestas en las calles, manifestaciones en Santiago, Valparaíso, Concepción y demás ciudades importantes... Y lo inesperado: grandes sectores de la juventud democratacristiana y de obreros de ese partido, en la misma noche del triunfo de Allende, salieron a unirse a las manifestaciones de la Unidad Popular, formando una especie de espontáneo «frente antiimperialista» que, evidentemente, hacía aventurado y brutal elegir, en cincuenta días más, como Presidente de Chile al segundo.

Además, el candidato Radomiro Tomic (el cual no estaba enterado del juego de su directiva manejada por Frei), al mediodía del 5 de septiembre acudió a la casa de Salvador Allende para «saludarte como el ganador y futuro Presidente». Allende frente a centenares de periodistas, abrazó a Tomic y le respondió: «Tu gesto moral consolida nuestra amistad de treinta años.»

Había que buscar «un nuevo método de escamotear el triunfo de Allende». Apresuradamente, durante todo el domingo 6 de septiembre, hubo reuniones secretas en las cuales participaron los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, por parte del candidato Alessandri; y los ministros de Hacienda, Andrés Zaldívar; de Defensa, Sergio Ossa Pretot; de Economía, Carlos Figueroa; y del Interior, Patricio Rojas, por parte del Gobierno de Eduardo Frei. Separadamente, también se reunieron ese día los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, general Carlos Guerraty; de la Marina, almirante Jorge Porta Angulo; de carabineros, general Vicente Huerta; y el jefe de la guarnición de Santiago, general (de Ejército) Camilo Valenzuela.

En seguida, el general Valenzuela y el ministro de Defensa, Ossa Pretot, tuvieron una conversación con el comandante en jefe del Ejército, general Schneider. La proposición era muy simple: Convencer a Eduardo Frei de la necesidad de impedir a toda costa el triunfo de Allende en el Parlamento, por medio de una insurrección militar que desembocara en la renuncia de Frei, el nombramiento de una Junta Militar de Gobierno y el llamamiento a nuevas elecciones presidenciales, en el plazo de seis meses, solamente entre dos candidatos. Para justificar la insurrección militar, se proponía un plan de caos social provocado por un «pánico financiero» y una «oleada de atentados terroristas».

El general Schneider estuvo de acuerdo pero puso dos condiciones: primera, que él no participaría en esa Junta Militar,

retirándose del servicio activo en el momento de la proyectada insurrección; y segunda, que se informara de estos proyectos a la misión militar norteamericana, a fin de obtener «su apoyo» o servicios de «su experiencia».<sup>7</sup>

Desde la misma tarde del domingo 6 de septiembre, los conspiradores empezaron a poner en práctica lo acordado, comenzando una gigantesca red de llamadas telefónicas, advirtiendo a los usuarios que «los marxistas se quedarán con todo el dinero» y es necesario «retirar los ahorros y depósitos de cuentas bancarias». Desde el lunes 7 de septiembre, los locales de los bancos comerciales, estatales y de sistemas de ahorro y préstamo para construcción de viviendas amanecieron con largas filas de depositantes que deseaban retirar sus fondos. Dos semanas después de las elecciones, se habían retirado de las cuentas corrientes en el sector privado en los bancos comerciales y el Banco del Estado, 611 millones de escudos (unos 50 millones de dólares); de los depósitos de ahorro en el Banco del Estado, se retiraron en el mismo período 54 millones de escudos (alrededor de 4,5 millones de dólares); los retiros en fondos de certificados de ahorro reajutable fueron de 11 millones de escudos (unos 900.000 dólares); y en las cuentas de ahorro y préstamo para construcción de vivienda, se retiraron 322 millones de escudos (más de 26 millones de dólares).

Los grandes monopolios comenzaron a exigir el pago al contado, por ventas que antes se hacían a plazos a base de materias primas, a los empresarios medianos y pequeños. Al mismo tiempo, los monopolios suspendían sus compras a las empresas medianas y pequeñas, con lo cual les provocaban un doble problema de financiamiento. Ésta fue una hábil maniobra para oponer los intereses de los pequeños y medianos empresarios a los de los obreros, campesinos y empleados que simpatizaban con Allende, ocultando la realidad esencial de la contradicción entre los grandes monopolios y el resto de la sociedad.

La parte del «pánico financiero» se completó con la fuga de divisas, la especulación de dólares en el mercado negro y el aumento artificial de viajes al extranjero, en maniobras ilícitas que contaban con la protección de los ministros de Hacienda y de Economía, que eran cómplices en el complot.

Las ventas de dólares para viajar al extranjero, que desde enero a agosto de 1970 mostraban un promedio de 5,3 millones de dólares al mes, subieron en septiembre a 17,5 millones y en

octubre llegaron a 13,6 millones. El precio oficial del dólar era de 12,2 escudos por unidad, y en el mercado negro se llegó a cotizar a 70 escudos por unidad.

El día 13 de octubre, los dirigentes de la Confederación de la Pequeña Industria y Artesanado informaban que «los porcentajes de disminución del ritmo de actividad es del siguiente orden: Santiago, 53 %; Arica, 28 %; Antofagasta, 20 %; Coquimbo, 83 %; Valparaíso 30 %; Colchagua, 50 %; Concepción, 3 %, y los Angeles, 53 %». Alarmados, estos pequeños empresarios y artesanos señalaban que «en todo el país, las ventas han bajado en 38,4 %» y «tenemos existencia de trabajos solamente para 15 días y recursos para pago de jornales sólo para 20 días más».

El 23 de septiembre, cumpliendo con su parte en el complot, el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, pronunció un discurso por la cadena nacional de radio y televisión en que daba cifras aterradoras sobre el descalabro financiero y decía que «la situación económica del período pstelectoral derivaba de factores psicológicos» y que «los resultados más que probables de esta situación serían el de un desastre económico completo y generalizado».

En suma, la parte de «pánico financiero» del complot para impedir que Allende fuera elegido Presidente en el Parlamento el día 24 de octubre de 1970, se cumplió a la perfección. ¿Qué les falló entonces a los conspiradores, que no pudieron impedir la elección de Allende? Les falló el Pentágono, y con él, el generalato de las Fuerzas Armadas chilenas. La historia es esta.

A través de Arturo Matte Larrain, uno de los dueños del gigantesco monopolio del papel Manufacturera de Papeles y Cartones, los conspiradores establecieron un puente entre el presidente Eduardo Frei y la International Telephone and Telegraph (ITT), la cual, en combinación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), había decidido dar «todo su apoyo» a un golpe que impidiera la ratificación de Allende en el Parlamento chileno. Los «contactos» de Matte Larrain eran los ciudadanos norteamericanos Robert Berrellez y Hal Hendrix, ambos en el equipo de agentes latinoamericanos de la CIA, y ambos funcionarios de «relaciones públicas» de la ITT (este doble cargo de relacionador público y agente de la CIA parece ser muy socorrido en los Estados Unidos, ya que el actual Secretario de Prensa de la Junta, Federico Willoughbly McDonald, chileno, figuraba hasta el día del golpe del 11 de septiembre de 1973 como «relacionador público» de la Ford Motor en América Latina).

Así, Arturo Matte Larrain, el día 8 de septiembre, había tenido ocasión de informar a Frei cómo la ITT estaba presionando en Washington para que el Gobierno de los Estados Unidos apoyara una eventual Junta Militar que impidiera el nombramiento de Allende. Y como ya se había aprobado por varios consorcios norteamericanos con intereses en Chile (Anaconda, Kennecott, ITT, Bank of America, First National City Bank, Anglo Lautaro y Chase Manhattan, entre otros), se inició el plan general de «presión», que consistía en que los bancos no deberían dar créditos o demorar los ya aprobados; las compañías deberían demorar en hacer entregas de productos, envíos de dinero, despacho de repuestos, etc.; retirar toda la ayuda técnica y «hacer presión sobre las compañías de ahorro y préstamo para que se declaren en bancarrota». Matte le explicó a Frei que la ITT estaba dispuesta a poner todo el apoyo «económico» que fuera necesario, si el Gobierno de los Estados Unidos daba el visto bueno a la conspiración.

La respuesta de Frei, ese 8 de septiembre fue más o menos la siguiente: Yo no puedo hacer pedazos mi imagen de demócrata, por eso mismo, si el «desarrollo de la situación continúa», espero «que me derroquen a la luz pública y me exilien por un tiempo». Sin embargo, tienen todo mi apoyo personal, no haré nada por impedir que el colapso financiero y económico sirva de caldo de cultivo a una buena receptividad pública a un golpe militar que «ordene las cosas». Pero no haré nada, absolutamente nada que haga caer la sospecha pública sobre mí. Quiero cuidar mi imagen política por sobre todas las cosas.<sup>8</sup>

Más tarde, Matte, por intermedio de Hendrix de la ITT, recibió el recado desde Nueva York, del vicepresidente de ITT, Edward Gerrity, de que «convenciera a Frei de que tome un papel más activo, informando a Washington». Frei no se decidió nunca a dar ese paso.

Al mismo tiempo, el general de brigada Camilo Valenzuela jefe de la guarnición de Santiago, había hecho contacto con el ex general Roberto Viaux Marambio, y le había encargado la tarea de hacer «un equipo de choque» compuesto por personas «de confianza y con espíritu de combate», a fin de iniciar en todo el país un plan de atentados terroristas. El grupo de Viaux se formó, apoyado por otro grupo encabezado por Enrique Schilling, secretario privado del senador radical reaccionario Julio Durán, y por un naciente grupo de jóvenes universitarios dirigidos por el abogado Pablo Rodríguez Grez, que fuera secretario-

abogado de la campaña presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez.

Los terroristas, que comenzaron su labor en la segunda quincena de septiembre de 1970, contaron con la protección del general director de Carabineros, Vicente Huerta, y con la asesoría «técnica» de dos miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIM).

Todo estaba funcionando perfectamente en el esquema articulado la noche del domingo 6 de septiembre, excepto por dos detalles: el presidente Frei no colaboraba activamente, y el candidato triunfante Salvador Allende estaba estableciendo rápidamente contactos con representantes de las Fuerzas Armadas chilenas para «explicar su programa de Gobierno».

El embajador Edward Korry, de los Estados Unidos, se puso nervioso y comenzó a enviar recados a Eduardo Frei, sumamente insolentes, incluyendo la frase «díganle que se ponga los pantalones de una vez».

Por su parte, Salvador Allende comenzó a hacer saber a los generales de las Fuerzas Armadas (tuvo conversaciones con el general Manuel Torres de la Cruz, Herman Brady y René Schneider), que quienes se oponían a que fuera ratificado en el Congreso Nacional estaban cometiendo un error terrible, porque en la historia de Chile se había elegido al segundo en la votación por el Congreso Pleno. Porque «el millón de chilenos que me eligió» es un «destacamento de combate» que no aceptará tal decisión. Porque «mi programa» es un programa de «desarrollo del capitalismo de Estado » y no es socialista. Porque «las reformas» de mi «programa» son «la única salida pacífica que le queda a este sistema de vida para sobrevivir».<sup>9</sup>

Estas afirmaciones de Salvador Allende, por otro lado, habían sido repetidas a los dirigentes demócratacristianos que no estaban comprometidos en el golpe militar: Renán Fuentealba y Bernardo Leighton, de enorme peso sobre la opinión de los miembros de la Junta de ese partido. De allí surgió la idea de hacer firmar a Allende un Estatuto de Garantías Democráticas, para ser incorporadas a la Constitución chilena, que servirían como un certificado de conducta «no marxista» de Allende. El día 8 de octubre, ese Estatuto ya estaba redactado y aprobado tanto por la Democracia Cristiana como por la Unidad Popular, lo que aseguraba que, por lo menos una gran mayoría de parlamentarios demócratacristianos votarían el 24 de octubre por Salvador Allende, dándole los votos suficientes para ser elegido.

Pero, al mismo tiempo que en la primera semana de octubre las conversaciones de Allende con el PDC daban sus frutos, también fructificaban sus recados y conversaciones con los jefes de las Fuerzas Armadas. El general René Schneider había informado a la misión militar norteamericana en Santiago de todo lo que ocurría, y ésta, a su vez, al Pentágono. En el Pentágono se había evaluado la situación, y en los primeros días de octubre, la misión militar norteamericana informó a Schneider que «todo el plan queda cancelado». Se le explicó por qué, y Schneider, el día 15 de octubre, en la Academia Politécnica del Ejército, dio una charla sobre el tema, repitiendo las instrucciones que le habían dado los generales de Washington:<sup>10</sup>

1) No debemos actuar torpemente en un momento tan delicado de la vida constitucional chilena. Las Fuerzas Armadas no pueden ahora «detener la evolución y los cambios». Nuestro deber «es aceptarlos» para cuidar de que se desarrollen en orden y sin descarrilar la tranquilidad social.

2) El «pesimismo y la pérdida de fe» pueden llevar a equivocarnos, a creer que «el enemigo marxista está a las puertas» y cometer un error de «caer en extremos» para combatirlo.

3) Un grupo muy importante de chilenos, en estos momentos, «no está dispuesto a dejarse arrebatar un triunfo electoral que cree les cambiará el curso de sus vidas». Nuestro deber es permitir que esas personas intenten su experimento, pero sin causar daños a los demás. Sin causar daños a nuestra Patria, a nuestra vida institucional.

4) «El señor senador Salvador Allende nos ha dado seguridades» de que se mantendrá dentro de la Constitución y las leyes. De que sus «cambios programáticos» no representan un peligro para nuestro modo de vida occidental y cristiano. El señor senador me ha dicho personalmente algo en lo que estoy de acuerdo con él: en estos momentos, un Gobierno como el del señor Allende, es el único tipo de gobierno que puede impedir que estalle una insurrección popular violenta y trágica.

5) Las Fuerzas Armadas, que somos garantía de que esta sociedad siga siendo «occidental y cristiana», tenemos que «esperar y ver qué sucede en el futuro». El futuro nos dirá si tenemos que intervenir para volver a poner las cosas en su lugar, o si el señor senador Salvador Allende cumple su palabra de «encauzar» LA INQUIETUD popular y de «impedir la insurrección de los que nada tienen».

El Pentágono había dicho su palabra, y el comandante en

jefe del Ejército chileno se la había hecho saber a los altos mandos. También se la dió a conocer al director general de Carabineros, al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y al comandante en jefe de la Marina. Cuando éste, Jorge Porta Angulo, se lo hizo saber al cuerpo de almirantes, cuatro de ellos se entrevistaron con el senador Salvador Allende, para preguntarle si era cierto lo que se decía en las Fuerzas Armadas acerca de su pensamiento político. Allende reafirmó todos los conceptos vertidos por Schneider. El almirante Porta Angulo renunció a su comandancia en jefe, y fue reemplazado por el jefe de la Primera Zona Naval (Valparaíso), vicealmirante Hugo Barrios Tirado.

En suma, lo que había ocurrido fue que en la primera semana de octubre de 1970, el Pentágono había dicho NO al golpe militar en Chile, y los generales chilenos tenían el encargo de desarmar la maquinaria golpista ya en marcha. La decisión del Pentágono causó un tremendo impacto en la CIA, que confiaba en seguir adelante de todas maneras. Esta falta de coordinación entre el Pentágono, el propio presidente Nixon y la CIA, provocaría una trizadura en el equipo conspirativo, que quedaría reducido al grupo de choque del general Roberto Viaux.

En los mensajes de Robert Berrellez y Hal Hendrix a la vicepresidencia de la ITT en Nueva York, a partir de septiembre de 1970, es notorio este problema de descoordinación con el Pentágono. Por ejemplo, en un documento fechado en Santiago de Chile el 18 de septiembre, y dirigido a Edward Guerrity, vicepresidente de la ITT en Nueva York, Hal Hendrix le comunica: «El martes en la noche (15 de septiembre), el embajador Edward Korry finalmente recibió un mensaje del Departamento de Estado, dándole luz verde para actuar en nombre del presidente Nixon. El mensaje le dio la máxima autoridad para hacer todo lo posible —menos una acción tipo República Dominicana— para impedir que Allende tome el poder». El mismo informe agregaba que «debemos hacer cuanta presión podamos sobre el USIS (United States Information Service) en Washington para que dé instrucciones a la USIS de Santiago de que comience a mover los editoriales de «El Mercurio» alrededor de América Latina y hacia Europa».

El informe agregaba que «Arturo Matte Larrain cree» que Eduardo Frei todavía no se decide, que «hay que darle la presión adecuada» y que se «formará un equipo de periodistas» de «El Mercurio» para «crear buena imagen» para el golpe. (Cita-

do de los documentos puestos a disposición de la comisión investigadora del Senado norteamericano sobre la ITT, en 1972, por el periodista Jack Anderson).

Es decir, el 15 de septiembre, Nixon aparecía dando «luz verde» para la conspiración, en circunstancias que el Pentágono todavía estaba «evaluando la situación» y no había decidido aún qué partido tomar.

El 30 de septiembre, Guerrity comunica al vicepresidente de la ITT chilena (Benjamín Holmes), que Jack Guilifoyle, vicepresidente en Nueva York de la ITT, había sostenido una «entrevista importante sobre el tema» con William Broe, director general de la CIA para América Latina.

El 9 de octubre, ya quedaba claro que la ITT en Washington, que Nixon había «echado pie atrás» a su «decidida actitud de luz verde» del mes de septiembre, y el vicepresidente de la ITT en Washington, William Merriam, remitía un informe a John McCone, ex director general de la CIA y ahora miembro del equipo ejecutivo de la ITT, en el que ironizaba diciendo que está «bastante sorprendido» de saber que la Administración Nixon está dispuesta a tomar una actitud dura «si Allende es elegido», y comentaba «ésta es la primera cosa comfortable que he oído».

A estas alturas, el Pentágono ya había hecho conocer su opinión a Nixon, y había ordenado a su hombre en Santiago, Schneider, que desmontara el golpe. Sin embargo, la ITT insistía, y desde Santiago, Hal Hendrix, director de relaciones públicas de la ITT para América Latina (y agente de la CIA), transmitía a Edward Guerrity, el 16 de octubre, lo siguiente:

«Las posibilidades de un golpe de Estado son magras pero existen... Una figura clave de esa posibilidad es la del general de brigada en retiro Roberto Viaux Marambio». Pero advertía: «Es un hecho que la semana pasada Washington dio instrucciones a Viaux de echarse atrás. Se tenía la impresión de que no estaba suficientemente preparado... Al parecer, algunos emisarios le advirtieron a Viaux que si se movía prematuramente, su golpe sería comparable a una Bahía de Cochinos en Chile.»

Hendrix no estaba contando todo a Guerrity. Ocurre que el día 3 de octubre, el otro agente de la CIA, y coequipo de Hendrix, Robert Berrellez, se había reunido con Roberto Viaux y su suegro Raúl Igualt en el Country Club de Santiago, para examinar la «noticia» de que Washington quería que Viaux cancelara el

golpe. Viaux contó a Berrellez que había recibido un informe de parte del general Schneider, en que se daba por cancelado todo el plan. Berrellez fue de opinión de que «hay traición» en alguna parte y convenció a Viaux de que siguiera adelante con el plan. Éste le comunicó que tenía pensado un autosequestro del comandante en jefe René Schneider, para provocar dos o tres días de tensión, y después derrocar a Frei y nombrar una Junta Militar de la que el general Camilo Valenzuela sería el jefe. Berrellez estuvo de acuerdo en cumplir con el «autosequestro», pero ahora como secuestro verdadero. También Berrellez había informado a Hendrix que Viaux se mostró furioso con Schneider y que estuvo de acuerdo en que, de haber «un traidor», ése tenía que ser el comandante en jefe del Ejército.

El día 20 de octubre, cuando ya el general Schneider había desmontado todo el dispositivo militar activo para el golpe vetado por el Pentágono, Hal Hendrix comunicaba a sus jefes en Nueva York:

«Hay una resignación general de que Allende gane fácilmente en el Congreso... A pesar de lo antes mencionado, queda en Chile un débil susurro de esperanza de que se monte un golpe militar para impedir que Allende llegue a la presidencia... Cierta personal militar continúa esperando que el ex general Viaux encabece una acción militar contra el especulador que no cumple sus compromisos, el presidente Eduardo Frei, antes del 4 de noviembre, para colocar las Fuerzas Armadas en el poder y así impedir que Allende lo asuma.»

Ese mismo día, el grupo dirigido por el ex general Viaux preparaba los últimos detalles para lanzarse en la aventura y utilizar al «traidor Schneider» como elemento detonante de la bomba para el «caos social» y el golpe militar. En la mañana del día 22, el ex general Viaux mandó a un equipo de su grupo a «liquidar al traidor», y el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército chileno, era acribillado a balazos en el interior de su automóvil Mercedes Benz. Agonizante, muere tres días después, cuando el Congreso Pleno había elegido Presidente a Salvador Allende.

El 25 de octubre, Hendrix informaba a Nueva York: «Contra lo que todos esperaban, los militares no se movieron contra Allende el fin de semana. Se creía que el atentado era el preludio del golpe».

Es que el Pentágono había dicho a los generales chilenos que NO SE MOVIERAN, y éstos no se movieron aun cuando

les asesinaron a su comandante en jefe, el cual, por cumplir las órdenes de Washington, había arriesgado su vida.

Allende se convirtió en Presidente de la República y estuvo de acuerdo con el sucesor de Schneider, general Carlos Prats González, en «investigar el crimen del general Schneider de modo de no provocar *un quiebre* en las Fuerzas Armadas». En otras palabras, no investigar las verdaderas causas del crimen de Schneider, el verdadero grado de complicidad de los generales chilenos con el golpe y con el Pentágono, y la real participación de Eduardo Frei y su grupo de ministros en el complot. Prats garantizaba a Allende la «lealtad» del Ejército, si Allende garantizaba a Prats no obligarlo a investigar. Fue el primer acuerdo «peligroso» que Allende tuvo con los generales chilenos, y que lo fueron colocando dentro de la línea de fuego de su poder real.<sup>11</sup>

Las Fuerzas Armadas acordaron sacrificar a Vicente Huertá Celis, general director de Carabineros, al almirante Hugo Barrios Tirado, comandante en jefe de la Marina, y a Carlos Guerraty, comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Los sustitutos fueron: el general José María Sepúlveda Galindo, en Carabineros; César Ruiz Danyau, en la Fuerza Aérea, y el almirante Raúl Montero, en la Marina. Todos ellos, junto con Carlos Prats, exigieron a Allende que no «removiera» generales (como era habitual cada vez que se cambiaba Presidente de la República), para «cuidar la estabilidad y la cohesión institucional». Allende, una vez más, aceptó.

Pero, aprovechándose del hecho que los militares no permitirían que se descubriera la verdad, Allende, desde ese momento, utilizó el asesinato del general Schneider como la supuesta demostración de que «por sobre todas las cosas, las Fuerzas Armadas chilenas son profesionales y respetuosas de la Constitución y las leyes». Allende, así, convirtió a Schneider en un símbolo de la «lealtad de la Patria». Y lo hizo a tal grado, que pronto, al menos por los hechos posteriores, se autoconvenció de ello, y perdió fatalmente de vista la verdad de que Schneider había obedecido órdenes del Pentágono hasta su muerte, y que la maquinaria que el Pentágono tenía en las Fuerzas Armadas chilenas estaba intacta, y él había estado de acuerdo en dejarla intacta siendo, como lo era, una maquinaria de muerte apuntada hacia su propio pecho.